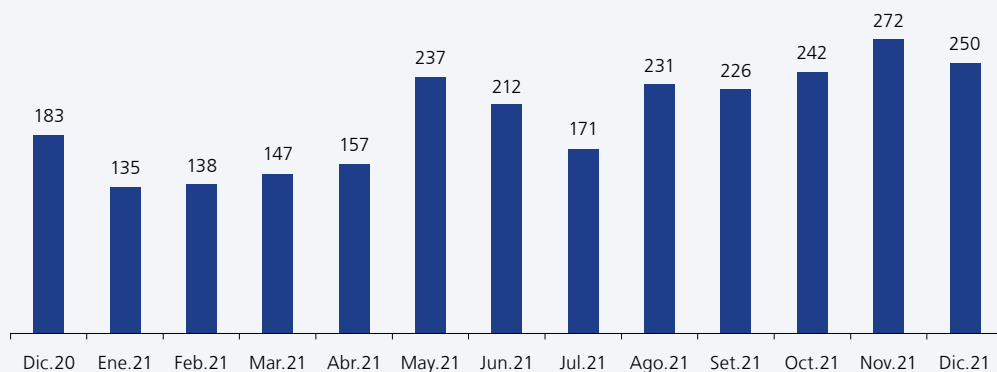


Recuadro 5 CONFLICTOS Y ACTIVIDAD MINERA

En 2021, la actividad del sector minería metálica creció 9,7 por ciento respecto al año previo. Sin embargo, se contrajo 5,5 por ciento en comparación a 2019, debido a que la producción de algunas minas se mantuvo restringida por los protocolos de bioseguridad contra la propagación del COVID-19, así como por menores leyes y conflictos sociales.

Según la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2021 se contaba con 98 conflictos socioambientales activos, de los cuales 63 estaban relacionados al sector minero y 23 al de hidrocarburos. Adicionalmente, las acciones de protesta colectiva en el Perú, como plantones, encadenamientos, bloqueos de vías, marchas, movilizaciones, entre otros, ascendieron a 250, alcanzando un pico en noviembre.

ACCIONES DE PROTESTA COLECTIVA (Número de acciones)



Fuente: Defensoría del Pueblo.

En 2021 se realizaron bloqueos de vías contra grandes y medianas empresas mineras, como Antamina, Las Bambas, Constancia, Antapaccay, Apumayo, Ares y Buenaventura (unidad Uchucchacua), lo que afectó negativamente la producción de cobre, oro, zinc, molibdeno, plomo y plata. Algunos de los conflictos que sucedieron en dicho año son los siguientes:

1. El 20 de enero pobladores de Chumbivilcas (Cusco) bloquearon la vía de acceso y salida a la mina Constancia debido a que, después de 4 años, aún no se llegaba a un acuerdo sobre los términos del convenio marco que especifica el aporte anual de la empresa. Dirigentes demandaban S/ 50 millones, mientras que la mina propuso destinar S/ 40 millones.
2. El 8 de marzo, las organizaciones de Espinar (Cusco) iniciaron una huelga indefinida contra la empresa Glencore-Antapaccay, en contra del proyecto de expansión Coroccohuayco.
3. El 24 de julio, los integrantes de la comunidad de Chumbivilcas iniciaron un paro indefinido en contra de la empresa minera Las Bambas, solicitando, entre otros, que se deje sin efecto la

resolución ministerial que declara la carretera que pasa por sus comunidades como vía nacional. El 2 de agosto se acordó una tregua por dos meses que serviría como tiempo de negociación entre ambas partes. Sin embargo, en setiembre, se reactivó el conflicto y bloquearon el corredor por alrededor de 20 días.

4. Del 19 al 27 de octubre se registraron protestas por parte de la comunidad de Cotabambas. Los manifestantes reclamaban el pago de compensaciones por sus predios, pasivos ambientales, entre otros. El 27 de octubre se llegó a un acuerdo en donde se definió una reunión con el gerente de Las Bambas para el martes 9 de noviembre. Tras ello, el 19 de noviembre, 10 comunidades de Chumbivilcas reiniciaron el bloqueo del corredor minero del sur, denunciando a Las Bambas de no haber cumplido con los compromisos pactados¹⁵. Al no llegar a un acuerdo, el bloqueo continuó hasta el 31 de diciembre, en donde se acordó con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones un presupuesto para el saneamiento del corredor minero y una futura fecha para que se discuta la posibilidad de que la comunidad participe en la cadena de valor de la mina.
5. La unidad minera de Uchucchacua de Buenaventura, que produce plata, zinc y plomo, suspendió sus actividades de producción desde el 13 de setiembre, por el paro realizado en la Comunidad Campesina de Oyón desde dicho mes, y con el objetivo de lograr una operación más eficiente y rentable. Durante la paralización, se implementarían medidas para reducir costos fijos, enfocar las exploraciones en zonas de mayores leyes, entre otros. Cabe recalcar que la empresa no espera que la suspensión de la producción de la unidad afecte el inicio de operación del proyecto de plata de Yumpag para 2024.
6. De igual manera, desde el 25 de octubre, los pobladores del distrito de Livitaca (Chumbivilcas) bloquearon zonas del corredor minero contra la empresa Hudbay (Constancia), solicitando el incremento del convenio marco ante la ampliación de sus operaciones con el tajo de Pampacancha. Las comunidades proponen una transferencia anual de S/ 50 millones para el cierre de brechas de salud, saneamiento y educación.
7. El 28 de octubre las comunidades de las provincias de Lucanas, Parinacochas, y Paucar del Sara Sara en Ayacucho, anunciaron un paro indefinido contra las mineras Apumayo y Ares, solicitando el retiro de las empresas, a las que acusan de contaminar los recursos hídricos de la región. Alrededor de unas 500 personas invadieron e incendiaron las instalaciones de la Compañía Minera Apumayo.
8. El 31 de octubre, Antamina anunció la suspensión de sus operaciones ante las protestas y bloqueo de carreteras por parte de la comunidad de Aquia, quienes acusaban a la empresa de usurpar sus terrenos. La presencia de la empresa en esta región está centrada en el mineroducto que transporta la producción de concentrados de cobre.

15 Además, las comunidades exigían que se les otorgue un aproximado de 75 unidades de transporte de concentrado (alrededor del 20 por ciento de las unidades que utiliza la compañía), MMG Limited les ofreció 12.



PRINCIPALES ÁREAS DE CONFLICTOS MINEROS EN EL PERÚ



Fuente: Defensoría del Pueblo.

En 2021, la producción de **cobre**¹⁶ fue de 2,2 millones de toneladas métricas. Se estima que alrededor de 68 mil TMF se dejaron de producir por los constantes bloqueos en el corredor minero del sur y de Antamina, en noviembre. Ello tuvo un impacto en el PBI del sector minería metálica de -1,9 puntos porcentuales.

Asimismo, se dejaron de producir alrededor de 12 mil TMF y 488 TMF de **zinc y molibdeno** en 2021, respectivamente; cada uno tendría un impacto de -0,1 pp. Mientras que la menor extracción de **oro y plata** habría contribuido negativamente en -0,04 y -0,1 pp, respectivamente, al PBI del sector.

16 Concentrado de cobre obtenido por proceso de flotación.

PRODUCCIÓN MINERA PERDIDA DEBIDO A CONFLICTOS SOCIALES, SEGÚN METAL

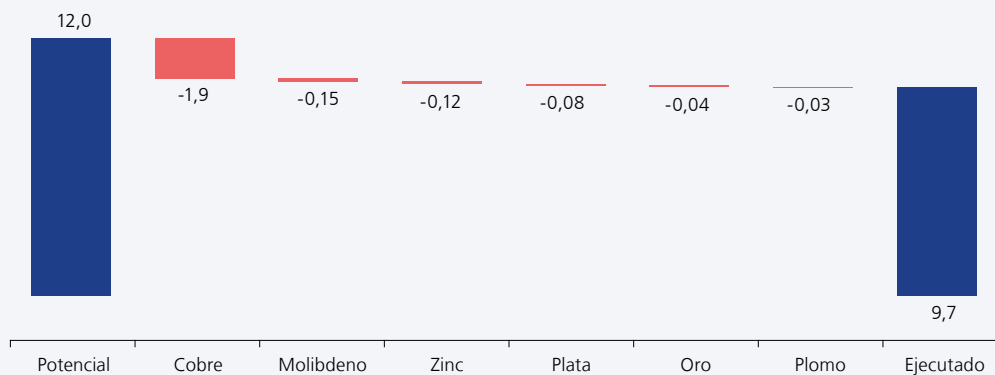
Metal	Minas	Unidades
Cobre	Las Bambas, Constancia, Antapaccay, Antamina	68 mil TMF
Oro	Antapaccay, Apumayo, Constancia, Ares	13 mil onzas troy
Zinc	Antamina, Buenaventura (Uchucchacua)	12 mil TMF
Plomo	Antamina, Buenaventura (Uchucchacua)	3 mil TMF
Plata	Constancia, Antamina, Antapaccay, Ares, Apumayo, Buenaventura (Uchucchacua)	1276 mil onzas troy
Molibdeno	Constancia, Las Bambas, Antamina	488 TMF

Nota: Para Las Bambas y Constancia, la producción perdida es la diferencia entre el límite superior de su plan de producción 2021 y el ejecutado. Para las demás unidades, la producción perdida cada mes es la diferencia entre el promedio de producción durante los meses sin conflicto en 2021 y el ejecutado.
Fuente: BCRP

En total, los conflictos de la gran y mediana minería habrían afectado negativamente al PBI del sector minería metálica en 2,3 pp. Ello habría tenido un impacto directo en el PBI total de -0,2 pp en el año 2021.

PÉRDIDA DEL PBI DEL SECTOR MINERÍA METÁLICA POR CONFLICTOS SOCIALES

(Var. % y puntos porcentuales)



Fuente: BCRP.

Conflictos sociales e inversión minera de mediano y largo plazo

Los recientes conflictos entre la comunidad de Chumbivilcas (Cusco) y la empresa MMG Las Bambas, cuyas operaciones se realizan en la zona fronteriza de Apurímac y Cusco, revelan que la situación de conflictividad puede escalar hasta lograr el cierre de las operaciones (no se realiza actividad de producción), y a que las empresas, involucradas o no en el conflicto, revisen sus planes de inversión y operaciones futuras en dichas zonas. Desde la perspectiva del sector minero, los conflictos¹⁷ socioambientales en este sector podrían reducir la inversión en el futuro (Chirinos, 2015).

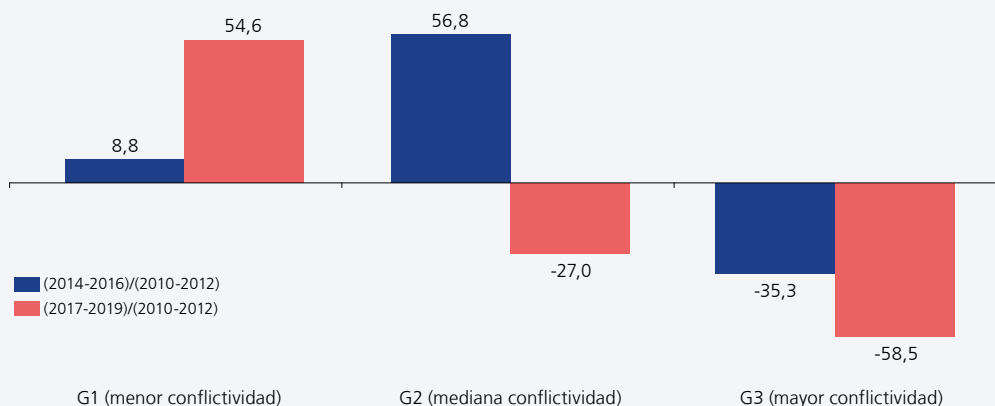
17 La Defensoría del Pueblo define la conflictividad social como “un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia”.



Para realizar una primera aproximación en el análisis de esta relación de mediano y largo plazo, se dividen a las nueve regiones con mayor participación en el PBI minero (juntas representan el 76 por ciento del valor agregado minero) en tres grupos (G1, G2 y G3), según el número promedio de conflictos socioambientales mineros reportados por la Defensoría del Pueblo¹⁸ entre los años 2008 y 2012. Se observa que hay una correlación entre las regiones que tuvieron una mayor cantidad de conflictos sociales en este periodo y las que registraron reducciones significativas en la inversión minera futura (hasta 10 años después). Por ejemplo, la inversión minera en el grupo G3 (regiones con mayor cantidad de conflictos sociales, y conformado por Áncash, Cajamarca y Cusco) cayó en 35,3 y 58,5 por ciento en los periodos 2014-2016 y 2017-2019, respectivamente, en comparación a la inversión minera registrada en los años entre 2010 y 2012.

CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN MINERA SEGÚN GRUPOS DE REGIONES MINERAS*

(En porcentajes)



* Grupos conformados por la cantidad de conflictos sociales mineros.
Fuente: BCRP y Defensoría del Pueblo.

A nivel departamental se destaca que, Áncash, región que aporta cerca del 17 por ciento del PBI minero, registró caídas de su inversión minera de 41,5 y 49,4 por ciento en los periodos 2014-2016 y 2017-2019, respectivamente. Estas reducciones en la inversión minera coinciden en que Áncash fue la región con mayores conflictos socioambientales mineros en el periodo 2008-2012 (en promedio, cerca de 10 conflictos). Por el contrario, las regiones donde ocurrió una menor cantidad de conflictos sociales sí registró un crecimiento positivo de la inversión minera. Por ejemplo, en La Libertad y Moquegua, ambas regiones con menos de 2 conflictos sociales entre 2008-2012, la inversión minera se incrementó en 8,7 y 54,1 por ciento entre 2014-2016, respectivamente.

La menor inversión privada (20 por ciento del PBI), como consecuencia de menores planes futuros de inversión y operaciones mineras tras los conflictos socioambientales, reduce el nivel de actividad actual, así como el crecimiento del producto potencial de mediano y largo plazo, lo que se vería reflejado en la menor generación de empleo, producción y recaudación. Por ejemplo, de acuerdo al Instituto Peruano de Economía (IPE, 2012), por cada empleo creado en la minería se generarían nueve empleos adicionales en el resto de la economía. De igual manera, el IPE destaca que la actividad minera, en los

18 Los conflictos socioambientales mineros reportados por la Defensoría del Pueblo se encuentran ligados, en su mayoría, a (posible) contaminación ambiental, autorización para el uso de recursos, entre otros, y son percibidos, de acuerdo a la III Encuesta Panel de Expertos Mineros de enero 2015, como la tercera causa más importante en el retraso de los proyectos de inversión minera. Esta causa prima sobre aquellas relacionadas con posibles menores cotizaciones y trabas administrativas.

últimos 10 años, representó cerca del 16 por ciento de la recaudación de los impuestos provenientes de las empresas¹⁹. De esta manera, debido a la importancia nacional y regional de la actividad minera, resultaría importante contar con una participación ciudadana oportuna e informada (Tanaka et al, 2005), a fin de evitar el escalamiento de los conflictos sociales. Inclusive, dicha participación sería fundamental en el proceso de una controversia ambiental, pues permitiría la toma de decisiones rápida y adecuada sobre los proyectos mineros responsables y sostenibles para que estos no se vean afectados.

PRINCIPALES REGIONES MINERAS: CONFLICTOS SOCIALES, VALOR AGREGADO Y CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN MINERA

	Promedio de conflictos	Participación de la minería en el VAB* departamental (por ciento)	Participación del departamento en el VAB* minero (por ciento)	Var. % promedio de la inversión minera	
				[2014-2016] / [2010-2012]	[2017-2019] / [2010-2012]
				2008-2012	
Menor conflictividad (G1)					
La Libertad	1,4	15,5	5,1	8,7	-25,7
Moquegua	1,0	35,7	5,8	54,1	289,3
Piura	1,4	17,2	5,1	-72,0	-82,2
Mediana conflictividad (G2)					
Arequipa	2,0	27,9	11,1	154,6	-12,0
Lima	1,6	1,8	6,0	-11,1	-20,5
Pasco	2,4	68,4	6,7	-38,9	-53,7
Mayor conflictividad (G3)					
Áncash	9,4	51,1	16,8	-41,5	-49,4
Cajamarca	7,4	33,9	6,9	-73,9	-70,6
Cusco	4,8	40,7	12,3	30,2	-48,5

* Valor Agregado Bruto.

Fuente: BCRP y Defensoría del Pueblo.

En el último reporte de Defensoría del Pueblo de enero de 2022, se registran 66 conflictos mineros activos (igual número de conflictos que en enero 2021). Por ello, es necesario continuar con las políticas de monitoreo y prevención de conflictos sociales, procurando preservar tanto la economía nacional como los derechos fundamentales de las personas en el área de influencia del conflicto.